
pesos en 1965. El valor total de los bienes de los sindicatos ascendía ese mismo año a 4.201 billones de pesos.

En sí mismas, esas enormes sumas se asociaban, por supuesto, al gangsterismo y la corrupción cada vez más identificados con el sindicalismo peronista. La prensa oficialista y los grupos opuestos a Vandor dentro de los sindicatos ponían en circulación muchas historias sobre el desvío de esos fondos en beneficio de determinados dirigentes. Igualmente significativo, sin embargo, era el hecho de que con ese dinero se solventaba toda una gama de servicios sociales ofrecidos por los sindicatos a sus afiliados. Los fondos también facilitaban a la conducción gremial central la implementación de una política clientelista de vasto alcance. El dinero y los servicios que proveía eran la base a partir de la cual se producían las negociaciones entre diferentes sectores de la burocracia. Tenían importancia por lo que representaban en términos de puestos de trabajo, influencia y prestigio. El sistema clientelista que sustentaban en los sindicatos se basaba en una compleja red de intereses entrelazados dentro de cada gremio y en el movimiento sindical en su conjunto.

El sistema de elecciones gremiales también otorgaba a las conducciones existentes un considerable poder para descabezar los desafíos a su autoridad. La ley 14.455 instituyó una política por la cual la lista ganadora se llevaba todo. En efecto, la lista mayoritaria asumía el completo control del sindicato. En sí mismo, esto podía contribuir a aumentar la violencia que rodeaba las elecciones, dado que la lista de candidatos elegidos no sólo ocupaba todos los cargos puestos en juego sino que, una vez en ejercicio de sus funciones, procedía a instalar a sus seguidores en todo el aparato administrativo. De tal modo, cada elección implicaba también una red de oportunidades laborales. Una vez elegido un grupo, era extremadamente difícil desalojarlo, dado que la organización de los comicios ulteriores y el establecimiento de las reglas del juego tanto para los procedimientos de votación como para el reconocimiento oficial de las listas opositoras quedaban a su exclusivo cargo. El resultado era un sistema que hacía virtualmente imposible que un grupo de oposición, aunque lograra superar los obstáculos en torno de la presentación de su lista de candidatos, desplazara a las autoridades existentes por medio de elecciones.

Vandor y los otros líderes sindicales, tanto peronistas como no peronistas —que amoldaban cada vez más sus conductas a la del líder metalúrgico—, utilizaron este sistema para convertirse en decisivos interlocutores sociales y políticos dentro de la sociedad argentina. En enero de 1963 se reconstituyó formalmente la CGT. Las 62 Organizaciones tenían una clara mayoría frente a los sindicatos no peronistas. Controlaban todos los sindicatos industriales y todos salvo uno de los comités regionales de la central obrera. Hacia 1962 los 32 Gremios Democráticos, de fuerte militancia antiperonista, prácticamente habían desaparecido, mientras que la influencia comunista también estaba restringida a unos pocos sindicatos más pequeños. La mayoría de los grandes sindicatos de empleados administrativos que habían sido el núcleo de los 32 Gremios Democráticos se definía ahora como independiente. Aceptaban la realidad de la influencia peronista en el movimiento sindical y necesitaban encontrar un *modus vivendi* eficaz con ella. La CGT reconstituída representaba justamente esa posibilidad. Si bien el comité central estaba dividido en partes iguales entre peronistas e independientes, Vandor insistió con éxito en que el secretario general debía ser un peronista y colocó a miembros de esta tendencia en los puestos clave de secretario del interior y de asuntos gremiales.

El secretario general elegido con la bendición de Vandor fue el líder de los trabajadores del vestido, José Alonso. La nueva confederación afirmaba tener alrededor de 2.567.000 afiliados.

Con la recién recuperada CGT en funcionamiento y su base de poder en las 62 Organizaciones ahora consolidada, la conducción sindical peronista lanzó una campaña para buscar soluciones a las penurias económicas y sociales de sus afiliados. El gobierno de Guido había implementado un plan de estabilización similar al de Frondizi, con parecidos resultados para la clase obrera: una pronunciada recesión, alto desempleo —sobre todo en industrias tradicionales como la textil y la metalúrgica— e inflación en aumento. La primera etapa de aquella campaña culminó con el lanzamiento del llamado Plan de Lucha.

La primera fase de este plan terminó en mayo de 1963 con una semana de protesta contra la política económica del go-

bierno de Guido. Se organizó una vasta serie de acontecimientos cuya intención era fortalecer la posición del movimiento sindical como un interlocutor crucial de otros sectores de la sociedad civil. Se realizaron debates y reuniones públicas con representantes de los estudiantes universitarios, las federaciones patronales y la Iglesia, en los cuales se discutían las políticas económicas, sociales y culturales. La semana culminó con un paro general de veinticuatro horas.

Con la mejora de la situación económica en 1963 y principios de 1964, la CGT intensificó su campaña para recuperar el terreno perdido. Sus intentos de presionar al gobierno radical de Arturo Illia, que había sucedido a Guido en julio de 1963, condujeron a la implementación de la segunda fase del Plan de Lucha en mayo y junio de 1964. Esta etapa consistió en una escalada de ocupaciones de fábricas en todo el sector industrial argentino. El principal arquitecto de este plan fue Vandor, y la industria metalúrgica encabezó el número de ocupaciones. Cuidadosamente planificadas y llevadas a la práctica bajo el firme control del aparato sindical, estas medidas fueron una

La CGT explica el Plan de Lucha

"Por Qué Luchan Los Trabajadores Argentinos

"Los trabajadores luchan pues por un mundo mejor, por la conformación de una sociedad basada en la justicia social y cuyo fin sea la felicidad y el bienestar de todos los habitantes. Por la igualdad ante la ley y por la equidad necesaria para que el débil no se vea explotado. Que la única diferencia sea la capacitación, pero que tengan las mismas oportunidades y que nadie se encuentre sumergido. O sea que Capital, Gobierno, Estado y Trabajo sean puestos al servicio del hombre en la gran dimensión humanista que representa. En una palabra, que el ser humano sea el medio y el fin de toda acción.

"Por eso luchan los trabajadores (...) ante el panorama opresor (...) y como una manera y táctica de esa lucha, los trabajadores argentinos ocupan en forma pacífica las fuentes de producción y comercialización, no para utilizarlas contra el país sino para ponerlas a su servicio."

Fuente: Declaración de la CGT, mayo de 1964, Santiago Senén González, *El sindicalismo después de Perón.*

La CGT exige un cambio de estructuras

"El avance de la ciencia y la técnica, aplicado a la solución de los problemas concretos del hombre de hoy, hace inexorable en su escala internacional una acción al respecto (...) Las tensiones sociales y políticas es reconocido que encuentran su causal verdadera en las insatisfacciones de las necesidades elementales del hombre, tanto como aquellas creadas por la civilización industrial de que formamos parte como país civilizado. El problema del subdesarrollo, entonces, es considerado como problema estratégico de primera prioridad por los países que tienen intereses económicos y defensivos en el mundo (...) La CGT sostiene la necesidad de exigir un organismo específico con participación sindical y poder de decisión al más alto nivel del Estado. Para lograr el esfuerzo concertado de la comunidad en las relaciones económicas, ésta sería una de las formas de participación posibles."

Fuente: CGT, "Hacia el cambio de estructuras", Buenos Aires, 1965.

impresionante muestra de organización y disciplina. A lo largo de cinco semanas, la CGT afirmó haber ocupado más de once mil plantas, con la participación de más de 3.900.000 trabajadores.

Con la conducción de José Alonso, la CGT asumió su papel de actor fundamental en los cruciales debates nacionales. En esos años la central obrera editó una gran cantidad de publicaciones e informes y organizó numerosas y bien publicitadas conferencias. Se crearon un departamento estadístico y una comisión de asistencia jurídica. Se restablecieron los lazos con sindicatos extranjeros y organizaciones laborales internacionales. Durante la secretaría general de Alonso, la CGT cultivó asiduamente la imagen de una central obrera avanzada y con capacidad técnica, que podía discutir científica y responsablemente el futuro de la nación. Esta postura implicaba tanto un análisis crítico de la inequidad de las estructuras económicas vigentes como una crítica de la eficacia de las formas representativas liberales. En ocasiones, esa crítica asumía una clara forma neocorporativista, ya que la representatividad de la CGT se comparaba favorablemente con la de los partidos políticos,

en cuya falta de legitimidad se hacía frecuente hincapié. Esta actitud se convirtió luego en una afirmación de la necesidad de institucionalizar esa función representativa y asegurar así al grupo social representado por la CGT —la clase obrera— el reconocimiento que merecía en las deliberaciones del Estado

EL DOBLE JUEGO: LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE JUGAR A LA POLÍTICA

La Ley de Asociaciones Profesionales daba a la conducción sindical un poder considerable. También habría que decir que era un poder ambiguo, característica que radicaba en el papel del Estado en las cuestiones del trabajo. La legislación laboral argentina otorgaba al gobierno el control de la mayoría de los asuntos internos de un sindicato. La capacidad misma de éste de negociar con la patronal dependía de que consiguiera y mantuviera la personería gremial. La ley laboral se ocupaba de



José Alonso presenta al vicepresidente, Dr. Perette, un petitorio. 1964.



todos los aspectos del funcionamiento sindical, desde la realización de elecciones hasta la contabilidad de los recursos económicos. Regulaba la frecuencia de las asambleas generales, determinaba cuáles eran los requisitos para ser delegado y establecía el plazo previo con que debía anunciarse la realización de una asamblea. Ahora bien, el uso concreto que el gobierno en ejercicio hacía de este poder era precisamente la base de las negociaciones entre los sindicatos y el Estado. Podía tratarse de un uso sutil: la tolerancia, quizá, de algunos abusos cometidos por una conducción gremial cuyos favores el gobierno estaba interesado en cultivar. De manera alternativa, podía implicar el acoso a un sindicato hostil cuya dirigencia y sus actos constituyeran un problema político para el gobierno. Dada la vasta gama de actividades gremiales cubiertas por las regulaciones laborales, el Ministerio de Trabajo siempre podía encontrar infracciones cometidas por los sindicatos si era necesario presionar a alguna conducción gremial en particular. En última instancia, ese ministerio tenía la facultad de designar a un interventor que se hiciera cargo del funcionamiento cotidiano de un sindicato o cancelar una personería gremial. A su turno, las consecuencias de estas medidas eran calamitosas desde el punto de vista sindical. Sin personería no era posible cobrar las cuotas, lo cual tenía un efecto inmediato sobre los servicios sociales y las tareas administrativas básicas del sindicato y amenazaba todo el sistema clientelista y de empleo.

El hecho de que una parte tan grande del funcionamiento sindical normal estuviera sujeta a esa estrecha supervisión potencial del gobierno de turno implicaba una inevitable "politicización" de los asuntos gremiales en la Argentina. Obligaba a los líderes sindicales a interesarse en el carácter del gobierno nacional, su actitud potencialmente amistosa u hostil hacia ellos. Por sí mismo, éste era un factor importante que contribuía a explicar el proceso de "integración" sufrido por los sindicatos peronistas en esos años; en efecto, inducía vigorosamente a la conducción sindical a adoptar un realismo pragmático. Sin embargo, vale la pena señalar que ello no implicaba simplemente la vulnerabilidad de los sindicatos. La situación era bilateral. El gobierno, resuelto a ampliar su control legal de los gremios, podía chocar con la determinación sindical de

procurar su desplazamiento del poder. En marzo de 1966 el gobierno de Arturo Illia promulgó el decreto 969, modificatorio de la Ley de Asociaciones Profesionales. La disposición representaba un ataque en toda la línea contra las facultades de la dirigencia sindical, ya que imponía reglas exigentes en beneficio de la democracia interna, debilitaba la capacidad financiera de las centrales gremiales y también restringía el uso de sus fondos para lo que llamaba propósitos abiertamente políticos. Enfrentados a semejante ataque estratégico al centro del poder sindical, los gremios peronistas replicaron del mismo modo. Gran parte de sus negociaciones con figuras militares en las últimas etapas del gobierno de Illia y su intransigente hostilidad hacia él deben verse bajo esa luz.

Los sindicatos peronistas también cumplían una función más específicamente política que se deducía de su papel como principal fuerza organizadora del movimiento justicialista en su conjunto. Esto implicaba su participación en lo que se ha llamado el "doble juego", consistente en representar a sus afiliados en la lucha por las demandas económicas y al movimiento peronista en sus conflictos y maniobras con otras fuerzas políticas argentinas. Este doble juego había sido claramente visible en las elecciones de marzo de 1962. En los años siguientes serían cada vez más notorios la tensión y el conflicto que este papel generaba dentro del movimiento justicialista y en las relaciones con el propio Perón. La tensión se centraba en el intento de la conducción sindical que rodeaba a Vandor de afirmar su dominación del movimiento peronista e institucionalizarla en una expresión política aceptable para las otras fuerzas actuantes en el sistema político argentino. Perón estaba resuelto a contrarrestar este desafío implícito a su posición como autoridad última y exclusiva del movimiento que llevaba su nombre. Entre 1962 y 1966 Perón realizaría esfuerzos sistemáticos por imponer en la Argentina una multitud de instituciones políticas peronistas que le respondieran directamente y limitaran la autonomía política del sector gremial.

Por lo común, se ha dicho que el proyecto vandorista implicaba la construcción de un partido obrero. Esto significaba la constitución de un partido político basado en los sindicatos, según el modelo de los partidos laboristas y socialdemócratas europeos. Sin lugar a dudas, ese proyecto podía reivindicar

ciertas raíces históricas dentro del peronismo, particularmente la creación del Partido Laborista en 1945. En algunos aspectos no era más que un desarrollo de la posición de facto en que se encontraron los sindicatos luego de 1955. El propio Vandor no tenía, en verdad, demasiados deseos de teorizar este proyecto. El dirigente sindical Miguel Gazzera, uno de sus íntimos colaboradores, señaló que aquél "estaba más interesado en los detalles planteados por una oportunidad determinada que en cuestiones de estrategia general".

Para Vandor, el problema fundamental en juego no era una cuestión filosófica sobre la representación laboral sino, antes bien, el equilibrio interno de fuerzas dentro del peronismo. Si en sus relaciones con el Estado y otros "factores de poder" los sindicatos tenían que afirmar su derecho a actuar más allá de la esfera estrictamente económica de las negociaciones colectivas, también debían plantear una pretensión de hegemonía dentro del movimiento justicialista. Esta pretensión chocaba tanto con los grupos neoperonistas como con el ala política oficial del movimiento. Por otra parte, también significaba una demanda al menos implícita de independencia relativa con respecto al mismo Perón. Si realmente eran la "columna vertebral" del movimiento, como Perón nunca se cansaba de repetir, debían tener la libertad de determinar la táctica en la Argentina y negociar su propio destino.

En una conferencia de las 62 Organizaciones celebrada en Avellaneda en octubre de 1965, los delegados vandoristas reafirmaron su "voluntad de promover la institucionalización del movimiento". Esto implicaría la creación de un partido político legal organizado de abajo hacia arriba, "de una manera limpia e internamente democrática". Era evidente que en un partido cuyos dirigentes fueran elegidos en un congreso nacional el papel de Perón sería limitado, dado que las decisiones políticas capitales dejarían inevitablemente de estar en sus manos.

Vandor era un astuto jugador del doble juego. En las elecciones de marzo de 1965, utilizando fórmulas partidarias neoperonistas, el sector sindical llevó al peronismo a una notable victoria. En la Cámara de Diputados había ahora un bloque peronista de facto constituido por cincuenta y dos miembros. En las provincias fueron elegidos más de ciento cincuenta diputados peronistas. En total, las listas justicialistas obtuvieron 147 escaños en el Congreso. Este resultado significó una demanda al peronismo de institucionalización del movimiento.

En la Cámara de Diputados había ahora un bloque peronista de facto constituido por cincuenta y dos miembros. En las provincias fueron elegidos más de ciento cincuenta diputados peronistas. En total, las listas justicialistas obtuvieron 147 escaños en el Congreso. Este resultado significó una demanda al peronismo de institucionalización del movimiento.

más de tres millones de votos. Paulino Niembro, un dirigente de la UOM y estrecho allegado de Vandor, encabezó el bloque peronista en el Congreso, como un símbolo del poder sindical y su posición dominante en el movimiento.

No obstante, el poder político que incluso un jugador tan astuto como Vandor podía extraer del doble juego también tenía claros límites. El hecho de ser los principales representantes políticos de Perón confería a los líderes sindicales cierta autoridad frente a las bases y una reserva esencial de apoyo que los fracasos en el campo estrictamente económico tal vez les habrían negado. Cada visita a Madrid podía utilizarse para contrapesar una huelga perdida o un mal convenio firmado. Al mismo tiempo, su capacidad de movilizar a la clase obrera en nombre de Perón era un arma importante que podían emplear para presionar al gobierno de turno con el fin de obtener beneficios económicos concretos. La línea divisoria entre las movilizaciones por reivindicaciones de rutina y las maniobras políticas se desdibujaba constantemente y era casi imposible de definir. Las ocupaciones fabriles de 1964, por ejemplo, respondieron a una genuina demanda de soluciones económicas pero también pretendían demostrar a los militares tanto la debilidad del gobierno de Illia como el poder correspondiente de los sindicatos. Las Fuerzas Armadas se convencerían así de la necesidad de llegar a un acuerdo con la dirigencia gremial en caso de que planificaran un golpe, o bien de dejar a un lado sus objeciones a la participación electoral peronista, con el argumento de que la intervención en el proceso político disiparía el poder social militante desplegado en las ocupaciones de fábricas.

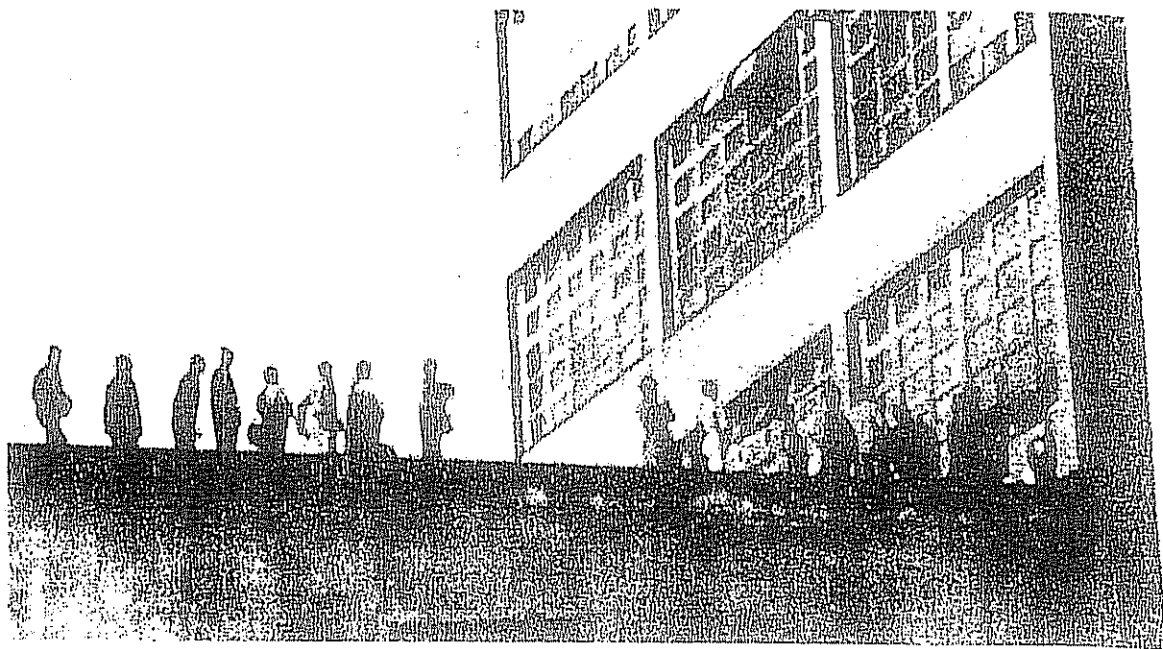
También podría aducirse, sin embargo, que la participación en este juego terminaba por ser desgastante para la conducción vandorista. En un marco institucional dominado por la dicotomía a favor de Perón/contra Perón, los sindicatos no podían estirar hasta donde quisieran la cuerda negociadora de la movilización peronista y la participación en las elecciones sin que las Fuerzas Armadas intervinieran y desbarataran el juego de amenazas y contraamenazas, instaurando un régimen menos expuesto a la presión sindical. Así, por ejemplo, los triunfos peronistas en las elecciones de 1965, motorizados por el sector gremial, y su probable victoria en las elecciones de 1967 entra-

ron en los cálculos de los planificadores del golpe de junio de 1966. Por lo tanto, el doble juego también era en parte un "juego imposible" que los sindicatos peronistas no podían ganar debido al hecho mismo de que eran la principal expresión política de Perón.

El célebre pragmatismo de Vandor implicaba una actitud oportunista cuando se trataba de tácticas y formas políticas. Los vandoristas se enorgullecían de decir que tenían la opción táctica de alcanzar el poder a través de elecciones o, si los triunfos electorales provocaban una reacción militar, encabezar la resistencia popular contra la dictadura castrense. En realidad, sin embargo, no se hacían ilusiones sobre las dificultades que los regímenes militares les planteaban en términos de negociación política. La lógica les indicaba la preferencia por la política electoral, por mucho que denostaran la ilegitimidad de la política partidaria tradicional en la Argentina. La conducción sindical era muy consciente de que su capacidad de alcanzar el poder y ejercer influencia dentro del sistema político provenía de su aptitud de movilizar a sus afiliados: en términos políticos, como delegados de Perón en la Argentina, y en términos más específicamente gremiales, como organizadores del movimiento obrero. Por definición, la vigencia de un sistema electoral —aunque restringiera el acceso peronista— les daba el mayor campo de acción para ejercer presiones y negociar.

También es importante advertir que su poder de negociación, desde un punto de vista político, procedía más de su posición como representantes de Perón ante las masas que de una capacidad negociadora autónoma debida a su actividad sindical y derivaba, en última instancia, del nombre del jefe del movimiento. Éste era una fuente de fortaleza pero también de debilidad porque, en definitiva, la dirigencia gremial no tenía la posibilidad de controlar la principal arma de negociación con que contaba.

El uso de la "camiseta" peronista les daba un margen considerable de maniobra y cierta independencia en sus tratos con Perón y los gobiernos, pero no era equivalente a negociar políticamente desde una posición de fuerza sindical autónoma. La conocida observación de Vandor de que "si dejara la camiseta perdería el gremio en una semana" era un reconocimiento rea-



Bomberos tratan de entrar a la fábrica Philips para desalojar a los obreros que ocupan el establecimiento siguiendo el Plan de Lucha de la CGT, 1964

lista de esa situación. Cuando la independencia de los dirigentes sindicales se convertía en una amenaza, Perón podía recordarles la naturaleza relativa de su poder. Dentro del sector sindical siempre había rivales que él podía movilizar para contrarrestar a Vandor, como lo hizo a fines de 1965 cuando Alonso y otros leales se separaron de éste y fundaron una entidad rival, las 62 Organizaciones de Pie Junto a Perón.

Así, Perón y los líderes sindicales estaban atrapados en un círculo vicioso. Dada la índole de la situación posterior a 1955, aquél estaba obligado a apoyarse primordialmente en los sindicatos como su principal herramienta de negociación y afirmación de las pretensiones peronistas dentro del sistema político. Al mismo tiempo, el éxito que los sindicatos alcanzaban al cumplir este papel, la confianza que obtenían con él y el impulso que los triunfos daban a su base organizativa planteaban inevitablemente un desafío a la capacidad de Perón de determinar el destino del movimiento. Ésa fue la tensión que se exteriorizó en la disputa entre el líder justicialista y Vandor en torno de las elecciones de 1965 en Mendoza (véase el capítulo I). El triunfo del candidato de Perón sobre el vandorista oficialmente designado, Alberto Serú García, mostró los límites

de la independencia del poder político sindical y su imposibilidad de crear un partido basado en los sindicatos que relegara a Perón al papel de una mera figura decorativa.

¿Qué podemos decir, entonces, de la imagen que Walsh tenía del vanguardismo? Indudablemente, los sindicatos iban a ser territorio cada vez más hostil para los activistas de base que trataban de criticar y oponerse a la conducción gremial. El uso de matones y de la "barra" para intimidar y reprimir a potenciales adversarios era un hecho cotidiano de la vida del vanguardismo. Pero no era ésta la única forma de exclusión practicada en los sindicatos. Aunque las mujeres tenían un peso creciente dentro de la fuerza laboral argentina, estaban virtualmente ausentes de los organismos directivos del movimiento sindical. Aun en sindicatos con una significativa concentración de trabajadoras, como los textiles, encontramos a muy pocas de ellas en los cuerpos representativos del gremio por



Augusto Vandor y a su lado Serú García durante el proceso electoral de Mendoza, 1965.

encima de la base fabril. Éste no era, por supuesto, un rasgo exclusivo del vandorismo. El mundo del activismo peronista, tanto sindical como político, tanto entre los duros como entre los vandoristas, era un territorio abrumadoramente masculino. A pesar de que las actitudes concernientes a los papeles apropiados para las mujeres en la cultura en general (véase el capítulo VII) comenzaban a cambiar en la década del 60, el activismo gremial siguió teniendo un fuerte contenido de género y se definía en términos de códigos masculinos de fuerza, valentía y compañerismo. En este aspecto, no había diferencias entre los sindicatos vandoristas e independientes.

La imagen del vandorismo que se difundió en la década del sesenta tenía dos componentes conexos. Uno se basaba claramente en el estilo represivo de gobierno interno de la conducción gremial. El otro se centraba en el proyecto integracionista de esta dirigencia para forjarse un espacio como agentes de poder del peronismo dentro de un statu quo que en última instancia excluía a la persona de Perón. Ambos estaban evidentemente ligados y fue esa conexión la que motorizó la oposición a la jerarquía sindical, ya fuera entre los duros de mediados de los años sesenta o entre las formaciones de la juventud y la guerrilla peronistas de fines de esa década y principios de la siguiente, fuertemente influenciadas por la visión crítica de autores como Walsh. Su oposición se nutría de una impresión de afrenta y ultraje morales. No obstante, podría decirse que en definitiva la lógica del "pragmatismo institucional" era ineludible tanto para dirigentes como para dirigidos dentro del movimiento sindical. Por otra parte, y en oposición a la imagen ampliamente difundida del vandorismo, también podría argumentarse que, como política, la integración fue notable no por el poder que brindó a los líderes gremiales peronistas sino por sus resultados relativamente magros. Es fácil exagerar los resultados de las consultas entre la CGT y las organizaciones patronales. La armonía de clases seguía siendo un objetivo retórico, pero en realidad las relaciones entre sindicatos y empleadores estaban lejos de ese ideal armonioso. En una situación económica que luego de 1955 fue testigo de frecuentes ataques contra los salarios y las condiciones laborales, Vandor y sus compañeros de la conducción sindical eran muy conscientes de la necesidad de ser vistos como adversarios de la

patronal y el Estado en esta cuestión fundamental. Por lo demás; el doble juego los obligaba a estar en condiciones de movilizar a sus afiliados cuando fuera necesario con el fin, por lo menos, de mantener su credibilidad como una fuerza que los otros "factores de poder" debían tener en cuenta.

En el plano de las relaciones entre el Estado y los gremios, también es posible argumentar que, a despecho del notorio mayor peso de los sindicatos peronistas dentro del sistema social y político, había una marcada falta de expresiones formales e institucionalizadas de colaboración entre ambos campos. Pese a sus charlas con los generales y su afable familiaridad con los presidentes, la influencia de los sindicatos peronistas en los centros de decisiones de la nación era reconocida a regañadientes y estaba estrictamente limitada por la restringida tolerancia a todo lo que fuera peronista y obrero. Un whisky con el ministro de Trabajo era, en última instancia, un pobre sustituto de unas auténticas instituciones de integración. La delgada línea por la que caminaba cualquier líder gremial entre integración y oposición era aún más delgada debido a las magras ganancias reales que podían hacerse en este período. La frustración ocasionada por un sistema que proponía la fachada y el potencial de la integración sin su sustancia permitió a la conducción sindical peronista gozar de cierta tolerancia hacia sus aspiraciones políticas y económicas y era a la vez un reaseguro de que nunca iba a aprovechar el poder que le otorgaba esa tolerancia. Eso la llevó a recibir con beneplácito el final de ese juego desgastante, al que puso término el golpe militar de junio de 1966.

LOS DIRIGENTES SINDICALES PERONISTAS Y LA REVOLUCIÓN ARGENTINA

En un comienzo, la conducción sindical había recibido con muchas esperanzas el nuevo régimen del general Juan Carlos Onganía. El apoyo mayoritario que dieron al golpe de junio se basaba en una profunda antipatía hacia el gobierno de Illia, que consideraban ilegítimo y hostil a sus necesidades. Por otra parte, simpatizaban con figuras militares como Onganía, que aparentemente compartía sus ideas sobre las soluciones requere-



*Asunción del general Juan Carlos Onganía.
Entre la concurrencia, Augusto Vandor.*

ridas por los problemas argentinos. Sus frecuentes contactos con muchas de las figuras que estaban detrás del golpe en los meses previos a su ejecución, junto con el peso de la presencia gremial en la sociedad argentina, parecían asegurarles un acceso privilegiado a las nuevas autoridades públicas. Según sus cálculos, un régimen militar también reduciría seriamente la capacidad de maniobra política de Perón y su ejercicio de la autoridad a expensas de la dirigencia sindical. Al cabo de un año, estos cálculos, aunque muy plausibles, se revelarían como ilusiones en su confrontación con un régimen extremadamente autoritario resuelto a lograr a cualquier precio la racionalización de la economía y la modernización del Estado (véase el capítulo II).

El régimen militar hizo dos cosas que socavaron el poder de la jerarquía sindical. En primer lugar, suspendió toda actividad y organización políticas. De ese modo esperaba abolir el complejo sistema de negociaciones políticas a través de las cuales

los grupos sociales antagónicos intentaban lograr que el Estado satisficiera las demandas de sus integrantes. Ahora bien, una de las premisas centrales del proyecto vandorista había sido precisamente la aplicación eficaz de la presión sindical peronista en un sistema político caracterizado por la existencia de gobiernos débiles y adversarios políticos divididos. Al suprimir la capacidad de negociación política de los grupos sociales, el régimen de Onganía esperaba sentar las bases de un Estado controlado por las elites militares y políticas, desembarazadas de la presión de otros grupos de interés.

Al mismo tiempo, el nuevo régimen impuso férreos controles a los incrementos salariales y suspendió las negociaciones colectivas habituales. También se propuso erradicar las áreas



El dirigente portuario Eustaquio Tolosa es conducido detenido por la policía.

improductivas de la economía, ante todo en distintos ámbitos del sector público y de las economías regionales subsidiadas (véase el capítulo IV). La prioridad de la nueva política sería el desarrollo del sector más dinámico de la economía. De tal modo, al suspender las negociaciones colectivas y el funcionamiento del sistema político, el régimen logró minar las dos fuentes de la capacidad negociadora tradicional de los sindicatos en el período 1958-1966. Enfrentada a un gobierno intransigente, la CGT convocó a regañadientes un paro de veinticuatro horas en marzo de 1967 para protestar contra los planes económicos del ministro de Economía, Adalberto Krieger Vasena. La respuesta del régimen consistió en suspender la personería gremial de muchos grandes sindicatos e interrumpir concretamente el funcionamiento de la CGT. Frente a esta catástrofe, la central obrera procuró reanudar las conversaciones con las autoridades. La respuesta fue el silencio. De ese modo, el régimen militar ponía a la conducción gremial frente a un dilema: su existencia institucional corría peligro si oponía resistencia a la política gubernamental y, al mismo tiempo, la dirigencia se arriesgaba a perder credibilidad entre sus afiliados cuando esa política afectara la vida de éstos.

La respuesta de la conducción sindical a esta crisis fue variada. Para los sindicatos que habían sido más golpeados por la política económica y sufrían la intervención gubernamental de sus organizaciones, la franca oposición tenía un atractivo inicial. En las circunstancias del momento, la tradicional política sindical de movilización y negociación era claramente insostenible. Con poco que perder, la oposición abierta parecía una opción lógica. Esta alternativa podía encontrar legitimación en la cultura política peronista si se postulaba como la encarnación de la tradicional oposición a los regímenes militares gorilas. Los sindicatos pertenecientes a este grupo —portuarios, ferroviarios, trabajadores del interior— tomaron la ofensiva en el congreso convocado para normalizar la CGT en marzo de 1968. Entre los dirigentes presentes en él, una clara mayoría criticaba la incapacidad de las anteriores autoridades para oponerse a las políticas del régimen y abogaba por una actitud de abierta resistencia. Este congreso eligió como secretario general a Raimundo Ongaro, el carismático líder de los trabajadores gráficos, en contra del candidato vandorista. Cuando los vandoristas se reti-

raron y constituyeron su propia central obrera, la CGT de Ongaro comenzó a conocerse como CGT de Paseo Colón o CGT de los Argentinos. Esta organización se convirtió en un punto focal de la creciente oposición de amplios sectores de la sociedad civil al autoritarismo del régimen (véase el capítulo VIII), a la vez que brindaba un centro organizativo a muchos duros marginados por Vandor en años anteriores.

Para numerosos sindicatos más pequeños con una posición tradicionalmente vulnerable en el mercado laboral, la oportunidad de construir un nicho dentro del nuevo régimen y lograr gracias a la protección estatal lo que habían sido incapaces de hacer por medio de la negociación parecía una alternativa igualmente lógica, una vez demostrada la ineficacia de la estrategia vandorista en la cual se habían apoyado. Conocidos como "participacionistas", estos dirigentes gremiales aceptaron la retórica corporativista del régimen sobre la necesidad de que los sindicatos concertaran una estrecha alianza con el Es-



Raimundo Ongaro, mayo de 1969.

lado. También esa alianza con figuras militares podía aducir precedentes en la ideología y la historia peronistas.

Los principales sindicatos peronistas agrupados alrededor de Vandor trataron de evitar alternativas tan drásticas. Sostuvieron, en cambio, la necesidad de adoptar una estrategia cautelosa con el objetivo de recuperar la fuerza sindical y al mismo tiempo mantener abiertos los canales de diálogo con el gobierno. Esta estrategia pragmática no era contradictoria con el tono general de desmovilización obrera prevaleciente en los años que siguieron al fracaso de los intentos de resistencia al régimen de Onganía.

Este debilitado y dividido movimiento obrero daría al presidente la "paz social" crucial para la implementación del "tiempo económico" del régimen. Las huelgas se convirtieron de inmediato en luchas contra el Estado y se recurría a las Fuerzas Armadas para aplastarlas. En estas condiciones, no había casi ninguna oposición nacional coherente a las políticas laborales y económicas del gobierno. Lo que el régimen ofrecía al movimiento obrero y a otros sectores de la sociedad argentina que sufrían las consecuencias de su política económica era la promesa de una mayor participación en las futuras etapas social y política de la revolución vagamente definidas.

Los pronósticos de manipulación social y política en los cuales se fundaba esa política cayeron hechos pedazos en mayo de 1969 cuando el descontento obrero y las tensiones de la sociedad civil se aliaron en una ola de protestas sociales generalizadas que se inició en Córdoba (véase el capítulo VIII). Si bien las implicaciones del Cordobazo fueron calamitosas para el régimen militar, también fueron ominosas para la jerarquía sindical. Aun la CGT de los Argentinos tuvo un papel relativamente marginal en los acontecimientos cordobeses. Tomados por sorpresa por los hechos, los sindicatos de todos los sectores del movimiento obrero intentaron ponerse a la cabeza de la movilización para restablecer así su credibilidad y negociar el poder con las autoridades nacionales. No obstante, los años que siguieron al Cordobazo presenciaron un agravamiento de la crisis de la dirigencia gremial peronista, ya que nuevos sectores comenzaron a poner en tela de juicio su posición.



*En Puera de Hierro, Juan D. Perón rodeado de dirigentes peronistas.
Entre otros: Julio Guillán, Antonio Caffero, Armando Cabo, Alberto Iturbe,
Sentulós, Vicente Solano Lima, Isabel Perón, Delia Parodi y Augusto Vandor.*

NUEVOS ACTORES DESAFÍAN A LA JERARQUÍA SINDICAL

Estos nuevos actores se concentraban principalmente en los sectores industriales más recientes establecidos durante el gobierno de Frondizi: sobre todo la fabricación de vehículos, la siderurgia y la petroquímica. Varias importantes características que los diferenciaban tendrían un profundo impacto en el surgimiento de una respuesta obrera militante a la patronal, el Estado y el movimiento sindical tradicional en el período posterior al Cordobazo. En primer lugar, Frondizi había permitido el establecimiento de sindicatos por empresa en muchas de estas industrias. Así sucedía, por ejemplo, en las plantas de automóviles de Fiat en Córdoba y en la nueva industria petroquímica. En otros casos, la representación gremial se otorgaba a sindicatos nacionales más débiles ya existentes. En la industria automotriz, por ejemplo, los derechos de organización fueron

concedidos al Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), inicialmente un pequeño gremio de mecánicos de estaciones de servicio, en contra de las pretensiones de la UOM. La segunda diferencia de ese sector consistía en que las compañías insistieron en obtener —y lo lograron— el derecho a firmar convenios por empresa, lo cual socavaba el sistema de contratos nacionales por rama industrial previsto por la Ley de Asociaciones Profesionales.

La descentralización de las negociaciones colectivas y los sindicatos por empresa contribuyeron a producir una mano de obra inicialmente dócil en este nuevo y dinámico sector de la economía argentina. También debilitaron el poder de la estructura sindical nacional, porque trasladaban el centro de la negociación por los salarios y las condiciones laborales en sectores productivos cruciales al plano de cada empresa, en desmedro de las tratativas nacionales. En la práctica, esto significó la ausencia de representación de los sindicatos nacionales tradicionales, principalmente peronistas, en muchas de las nuevas industrias. Ésta era una consecuencia prevista de la política estatal y patronal. El gobierno de Illia había respondido a la hostilidad gremial peronista mediante una política laboral cuya intención era alentar una mayor autonomía sindical local.

Sin embargo, luego de 1969 se puso de manifiesto otra consecuencia —imprevista— de esa política. El traslado de las negociaciones salariales y sobre las condiciones laborales al nivel de cada empresa contribuyó al renacimiento de los sindicatos y seccionales locales. A largo plazo, tanto la negociación como los sindicatos de planta fortalecieron la iniciativa y la capacidad de los afiliados locales para actuar y presionar a sus gremios y a los empleadores. El hecho de que las condiciones y los salarios se determinaran localmente proporcionó un eje a la actividad de las bases, ausente cuando esas cuestiones se resolvían en el plano nacional y luego se transmitían a las seccionales locales. Esto tendría importantes consecuencias en los años posteriores, al Cordobazo. Si bien la política laboral de las empresas del sector dinámico había garantizado el aislamiento casi completo de su personal con respecto a los sindicatos nacionales tradicionales, también significó, con el derrumbe del período de aquiescencia en mayo de 1969, que esas empresas se vieran frente a sindicatos que tenían muchas difi-

cultades para controlar la rebeldía de las bases. Esos gremios no contaban con el aparato de control interno que existía en los sindicatos peronistas tradicionales como la UOM, la construcción y los textiles. Ni siquiera sindicatos nacionales como el SMATA tenían la probada maquinaria interna de control característica de organizaciones industriales más antiguas. Por otra parte, tanto en los sindicatos de empresa como en las seccionales de los sindicatos nacionales que se rebelaban contra los dirigentes de éstos, tal como ocurría en las seccionales cordobesas del SMATA y Luz y Fuerza, las oposiciones locales se beneficiaban con la considerable autonomía financiera y organizacional que les otorgaba la legislación laboral. Sindicatos nacionales como el SMATA y Luz y Fuerza tenían estructuras federativas, y por esa razón su capacidad de doblegar el accionar de sectores locales díscolos era limitada.

La oposición laboral que floreció luego de 1969 quedó esencialmente confinada al interior del país. Sus representantes más conocidos tal vez fueran los dos sindicatos de las plantas de Fiat en Córdoba, SITRAC (Sindicato de Trabajadores de Concord) y SITRAM (Sindicato de Trabajadores de Materfer). En Buenos Aires, con anterioridad a 1973, el movimiento obrero se mantuvo virtualmente inmune al levantamiento del interior. La nueva militancia obrera centrada en éste se distinguía por una serie de características. Recurría con frecuencia a la acción directa y a otras formas no convencionales de movilización sindical. También tenía una naturaleza fundamentalmente antiburocrática. Se autodefinía sobre todo en términos de su oposición a los modelos existentes de conducción gremial y formas de gobierno interno. Agustín Tosco, el líder del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y la figura que llegó a simbolizar esta postura antiburocrática en el plano nacional, definía como burócrata a "alguien sin vocación, sin ideales, que se convierte en un típico 'administrador' de un cargo sindical, lo usa para su beneficio personal y desde ese lugar comienza a dominar a sus compañeros". En contraste, la nueva camada de militantes proponía un liderazgo honesto basado en la probidad personal y un compromiso con la democracia interna.

En un sentido general, además, los dirigentes que ocuparon el primer plano en este período centrado en Córdoba también

procuraban dar forma a su protesta gremial en términos de preocupaciones ideológicas más amplias. El clasismo, tal la denominación habitual de este movimiento opositor, implicaba para sus seguidores una identificación del movimiento obrero con la eliminación del capitalismo y la creación de una sociedad socialista. En su concepción, el sindicato tenía una función vital de despertar las conciencias con el fin de preparar a los trabajadores para lo que sería en última instancia una batalla política contra la patronal y el Estado. La vehemente insistencia antiburocrática del clasismo en la democracia interna y en la participación masiva planteaba para la jerarquía sindical peronista una clara amenaza en términos de influencia y ejemplo. Tanto para los sindicatos como para los empleado-

SITRAC habla de la CGT

“Esta crisis no puede resolverse con enjuagues de trastienda; es decir, con un simple cambio de mascaritas o con una trenza en la que sólo se discuta la cesión de un ‘puesito’ para, en definitiva, mantener esta política burocrática que los trabajadores condenamos. Esta condena que apunta a la dirección de las 62, tanto a los obsecuentes del plan Levingston como los que apuestan a un golpe ‘salvador’, se extiende a la dirección cegetista encabezada por José Rucci (...) esta conducción trata de mantenerse con una nueva carga de oxígeno (...) Nosotros afirmamos que la dirección y la política que el movimiento obrero cordobés y nacional necesita deben surgir y haberse probado en las luchas que libramos contra nuestros enemigos (...) esta dirección y esta política clasista y revolucionaria, ya han comenzado a dar sus primeros pasos (...) Para dar una salida que corresponde a nuestros intereses y reivindicaciones (...) importa que esa política que hoy surge arraigue en miles y miles de trabajadores de nuestra provincia y de todos los rincones de la Patria, que nos ayude a organizarnos por abajo y a barrer a esta conducción claudicante —que no nos representa— sentando las bases para la construcción de la CGT de y para la clase obrera y el pueblo.”

Fuente: Boletín de SITRAC, Nº 1, 13-1-1971, citado en Natalia Duval.

Los sindicatos clasistas SITRAC (1970-1971),

Centro Editor de América Latina, 1988.

res, el reconocimiento clasista de la naturaleza inconciliable de los intereses de clase implicaba una batalla constante entre ambos y la negación del terreno común del compromiso tan esencial para los gremios tradicionales y la patronal. También el régimen militar advertía con claridad la amenaza. El movimiento opositor había demostrado coherentemente su aptitud de impugnar el orden público mucho más allá de las puertas de la fábrica. Demostraba asimismo su capacidad de enunciar una amplia gama de reclamos sociales y políticos y proponer una redefinición del papel del sindicalismo y su misión para adoptar formas radicales de movilización.

DEL CORDOBAZO AL RETORNO DE PERÓN

En los años posteriores al Cordobazo, las Fuerzas Armadas trataron de cerrar la caja de Pandora de la insurgencia social y política desatada por el levantamiento cordobés. La incapacidad del presidente Onganía y de su sucesor, el general Levingston, para cumplir esta tarea les costaría su desplazamiento del sillón de Rivadavia. Desde 1971, con la conducción del nuevo presidente, el general Alejandro Lanusse, los militares se dispusieron a preparar el terreno para un retorno ordenado al régimen civil. El Gran Acuerdo Nacional, con la guía de Lanusse, pretendía reinstaurar las instituciones tradicionales de la vida cívica y política a fin de desactivar la insurgencia social que inundaba la Argentina. La proscripción de la actividad política partidaria se levantó en julio de 1971. El alto mando de las Fuerzas Armadas también se propuso incluir al peronismo en el consenso nacional que intentaba construir. La solución política que imaginaba implicaba la legitimación electoral de un candidato respaldado por los militares —el propio Lanusse— en comicios prometidos para 1973. Las autoridades militares suponían que tanto el radicalismo como significativos sectores del peronismo lo aceptarían como un costo necesario de la transición hacia la democracia. En este escenario ideal, los sindicatos peronistas cumplirían el vital papel de proporcionar la base social del plan. Los estrategas militares del Gran Acuerdo Nacional presumían que la dirigencia gremial recibiría con agrado la oferta de una estrecha relación con

una figura militar favorablemente dispuesta. Luego del trauma del régimen de Onganía y del constante ataque de las nuevas fuerzas opositoras de la clase obrera, esos dirigentes darían la bienvenida a la oportunidad de restablecer su control y credibilidad como actores fundamentales del sistema político argentino, brindada por un Estado que solicitaba su apoyo.

Este escenario militar demostró falta de realismo por muchas razones. La principal fue la astuta contraestrategia de Perón, que se mostró capaz de canalizar en beneficio de sus propias necesidades la crisis cívica y social que seguía desgarrando a la sociedad argentina. La movilización masiva de la juventud de clase media y la capacidad en rápido crecimiento de los grupos guerrilleros para llevar a cabo acciones sumamente eficaces fueron utilizadas por Perón para hostigar al régimen y dar lustre a su imagen como la única fuerza capaz de restablecer el orden social y controlar la amenaza planteada por una juventud y una protesta obrera radicalizadas.

En última instancia, también se demostró infundado el supuesto del régimen de que podría reclutar a una proporción significativa de la nueva dirigencia sindical para revivir el reformismo militar.

La crisis de la credibilidad sindical provocada por el régimen de Onganía no podía superarse simplemente por medio de una proclamación gubernamental. ¿Podría la dirigencia gremial dirigir y encauzar una protesta social que había surgido al margen de su control y era independiente de sus deseos? La modificación de la política económica dispuesta por Lanusse, junto con la vuelta a una forma limitada de negociaciones colectivas, señalaban la perspectiva de cierta rehabilitación de la conducción sindical. Pero el gobierno no estaba dispuesto a conceder las negociaciones colectivas irrestrictas que habrían dado a los dirigentes gremiales las herramientas para reafirmar su indiscutida hegemonía sobre las bases y embarcar a sus sindicatos en el camino del compromiso y la alianza imaginados por el Gran Acuerdo Nacional. Si bien eran capaces de mantener el control del aparato gremial con sede en Buenos Aires, ya no podían movilizar y conducir a sus afiliados como lo habían hecho durante el apogeo del vanguardismo.

Más importante aún, los estrategas militares subestimaban la posición cada vez más sitiada de las conducciones sindica-

les dentro del peronismo. En parte, esto se debía a la rehabilitación del sistema y los actores políticos. Aun un táctico tan astuto como Vandor sólo había logrado ambiguos resultados con las incursiones gremiales de mediados de la década de 1960 en la arena política. Con su asesinato y las incertidumbres de principios de la década siguiente, en el mejor de los casos las perspectivas sindicales dentro de una política democrática restaurada parecían dudosas. Los líderes gremiales eran conscientes de que cualquier apertura política fortalecería la posición de Perón y debilitaría la suya propia. Esto era especialmente cierto en un contexto que prometía la legalización política formal del justicialismo e incluso el posible retorno de Perón. Los sucesores de Vandor, conducidos por el nuevo secretario general de la CGT, José Rucci, apoyado por su compañero metalúrgico y dirigente de las 62 Organizaciones Lorenzo Miguel, adoptaron una actitud de completo acatamiento de las tácticas políticas de Perón. Subordinaron la CGT a las necesidades de negociación de éste con el régimen y las otras fuerzas políticas. Su principal interés consistía en afirmar sus pretensiones de compartir el botín ofrecido por el resurgimiento político de Perón.

La sensación de vulnerabilidad de la dirigencia sindical se debía a su inquietud por la influencia de las nuevas fuerzas dentro del movimiento. La amenaza planteada por los grupos guerrilleros y la Juventud Peronista era a la vez material y política. A partir del asesinato de Vandor en junio de 1969 y siguiendo con el homicidio de Alonso un año después, la guerrilla peronista inició una campaña de eliminación selectiva de líderes gremiales. La juventud de clase media que ingresaba en tropel al peronismo durante esos años señalaba a la burocracia sindical como el principal obstáculo a la concreción de las metas de esa corriente política como movimiento de liberación nacional. Para estos recién llegados, la burocracia sindical era una casta corrupta cuya función era reprimir y manipular a las masas peronistas y desviarlas de la lucha por una Argentina liberada.

La Juventud Peronista y las formaciones guerrilleras eran un desafío a toda la trayectoria del movimiento sindical dentro del peronismo y a la identidad que los dirigentes gremiales daban a éste como movimiento. El nacionalismo reformista que identificaban con el peronismo, y el pragmatismo y compromiso que

éste había llegado a implicar luego de 1955, sufrían hoy un asalto con características de cruzada moral emprendido por advenedizos sin antigüedad en el movimiento. Los recién llegados procuraban redefinir el peronismo en términos de un credo revolucionario que tenía poco significado para los dirigentes sindicales tradicionales. Esta redefinición entrañaba negar la legitimidad de la presencia misma de esos dirigentes dentro del nuevo peronismo imaginado por los jóvenes radicalizados.

Durante esos años, el propio Perón hizo poco por mitigar los temores de la conducción sindical. El líder justicialista advertía que los sectores juveniles representaban el humor prevalente de la sociedad argentina, en el que se mezclaban el resentimiento y la esperanza de renovación mucho más eficazmente que en una insegura dirigencia gremial. En ese carácter, la juventud era una importante herramienta de negociación para Perón, un recordatorio de la capacidad del peronismo de desestabilizar si no se reintegraba a la sociedad argentina en términos aceptables para él. A lo largo de 1972 hubo en los comentarios públicos de Perón un elogio constante a los "muchachos" y una crítica a la burocracia sindical. A medida que se acercaban las elecciones de 1973, los sindicatos adquirían creciente conciencia del menor peso que ahora tenían en el movimiento. En contraste con 1962 y 1965, cuando habían impuesto sus candidatos a voluntad, en estos momentos se veían obligados a aceptar la misma cantidad de candidaturas que las otras ramas del movimiento. No había una sola figura gremial que fuera candidato a gobernador. Más ominoso aún era el hecho de que el tono y la organización de la campaña electoral quedaran en manos de sectores juveniles que hacían tanto de los militares como de la burocracia sindical el blanco de un particular repudio.

Así, los resultados de las elecciones del 11 de marzo, que significaron el retorno del peronismo al poder, fueron vistos con escaso entusiasmo por la conducción gremial del movimiento. Tras dieciocho años de compromiso formal con la recuperación del poder, la realidad que enfrentaban cuando Héctor Cámpora juró como presidente el 25 de mayo ofrecía poco margen para el optimismo.

Traducción de Horacio Pons

